

En la sesión extraordinaria efectuada el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, emitió el siguiente:

***Acuerdo mediante el cual se abroga el Reglamento que establece el procedimiento para la liquidación y destino de los recursos y bienes remanentes de los partidos políticos estatales que pierdan o les sea cancelado su registro ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.***

#### **ANTECEDENTES:**

***Aprobación del Reglamento que establece el procedimiento para la liquidación y destino de los recursos y bienes remanentes de los partidos políticos estatales que pierdan o les sea cancelado su registro ante el IEEG***

I. Mediante acuerdo CG/041/2008, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en sesión ordinaria celebrada el veintiocho de noviembre de dos mil ocho, y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 208, del veintinueve de diciembre dos mil ocho, se expidió el *Reglamento que establece el procedimiento para la liquidación y destino de los recursos y bienes remanentes de los partidos políticos estatales que pierdan o les sea cancelado su registro ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato*<sup>1</sup>.

#### ***Expedición de la Ley General de Partidos Políticos***

II. El veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley General de Partidos Políticos.

#### ***Expedición Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato***

III. Mediante decreto número 180 de la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional del Estado de Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 102, cuarta parte, de fecha veintisiete de junio de dos mil catorce, se abrogó el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.

#### ***Expedición del Reglamento de Fiscalización***

IV. En sesión extraordinaria celebrada el diecinueve de noviembre de dos mil catorce, mediante acuerdo INE/CG263/2014, se expidió el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> En lo sucesivo *Reglamento*.

<sup>2</sup> En lo sucesivo *Reglamento de Fiscalización*.

### ***Recepción de la propuesta de abrogación del Reglamento***

V. El veintiséis de enero de dos mil dieciocho, se remitió al Consejo General por parte de la presidencia de la Comisión Temporal de Reglamentos y Normatividad Electoral, la propuesta de abrogación del *Reglamento*.

### **CONSIDERANDO:**

#### ***Personalidad y principios que rigen al IEEG***

1. Que el artículo 77, párrafos primero y segundo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, establece que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, y que gozará de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución Federal, la Constitución del Estado y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. De igual manera, se señala que será profesional en su desempeño y se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.

Asimismo, se estipula que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato es autoridad en la materia electoral, en los términos que establece la Constitución Federal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Constitución del Estado y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.

#### ***Facultad normativa del Instituto***

2. Que de conformidad con el artículo 92, fracción II, de la legislación electoral local, es atribución del Consejo General dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de dicha legislación.

#### ***Propuesta de abrogación del Reglamento***

3. Que este Consejo General, a propuesta de la Comisión Temporal de Reglamentos y Normatividad Electoral de este Instituto, considera necesaria la abrogación del *Reglamento*, por las consideraciones que se exponen a continuación:

#### ***Abrogación del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato***

I. Es importante destacar que, el *Reglamento* fue expedido teniendo como base el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, el cual, como se ha establecido anteriormente, fue abrogado. En atención a ello, las disposiciones que dieron origen al *Reglamento* son distintas a las que ahora rigen la materia electoral en el ámbito local.

Por otro lado, de acuerdo con lo señalado en el artículo 1° del *Reglamento*, éste tiene por objeto establecer el procedimiento de liquidación y destino de los recursos y bienes remanentes pertenecientes a los partidos políticos estatales que

pierdan o que les sea cancelado su registro ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 bis y 39 bis 1 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.

Por lo anterior, se considera que, de seguir vigente el *Reglamento*, se contravendrían los principios a los que se sujetan los reglamentos en general, a saber, reserva de ley y subordinación jerárquica. Lo anterior, consiste en la exigencia de que un reglamento sea precedido necesariamente por una ley, cuyas disposiciones desarrolle, complemente o detalle, y en las cuales encuentra su justificación y medida.

Sirve a lo anterior, la tesis emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido siguiente:

**“FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES<sup>3</sup>.** La facultad reglamentaria está limitada por los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica. El primero se presenta cuando una norma constitucional reserva expresamente a la ley la regulación de una determinada materia, por lo que excluye la posibilidad de que los aspectos de esa reserva sean regulados por disposiciones de naturaleza distinta a la ley, esto es, por un lado, el legislador ordinario ha de establecer por sí mismo la regulación de la materia determinada y, por el otro, la materia reservada no puede regularse por otras normas secundarias, en especial el reglamento. El segundo principio, el de jerarquía normativa, consiste en que el ejercicio de la facultad reglamentaria no puede modificar o alterar el contenido de una ley, es decir, los reglamentos tienen como límite natural los alcances de las disposiciones que dan cuerpo y materia a la ley que reglamentan, detallando sus hipótesis y supuestos normativos de aplicación, sin que pueda contener mayores posibilidades o imponga distintas limitantes a las de la propia ley que va a reglamentar. Así, el ejercicio de la facultad reglamentaria debe realizarse única y exclusivamente dentro de la esfera de atribuciones propias del órgano facultado, pues la norma reglamentaria se emite por facultades explícitas o implícitas previstas en la ley o que de ella derivan, siendo precisamente esa zona donde pueden y deben expedirse reglamentos que provean a la exacta observancia de aquélla, por lo que al ser competencia exclusiva de la ley la determinación del qué, quién, dónde y cuándo de una situación jurídica general, hipotética y abstracta, al reglamento de ejecución competará, por

---

<sup>3</sup>Tesis P./J.30/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t.XXXV, mayo de 2007, p. 1515.

consecuencia, el cómo de esos mismos supuestos jurídicos. En tal virtud, si el reglamento sólo funciona en la zona del cómo, sus disposiciones podrán referirse a las otras preguntas (qué, quién, dónde y cuándo), siempre que éstas ya estén contestadas por la ley; es decir, el reglamento desenvuelve la obligatoriedad de un principio ya definido por la ley y, por tanto, no puede ir más allá de ella, ni extenderla a supuestos distintos ni mucho menos contradecirla, sino que sólo debe concretarse a indicar los medios para cumplirla y, además, cuando existe reserva de ley no podrá abordar los aspectos materia de tal disposición.”

### ***Facultad reglamentaria del IEEG***

II. La naturaleza jurídica de la facultad reglamentaria está entendida como aquella relativa a proveer en la esfera administrativa la exacta observancia de las leyes y es otorgada en principio, al Poder Ejecutivo; sin embargo, la misma puede ser conferida a través de un acto formalmente legislativo, a un órgano del estado para que regule una materia específica, siendo una de las atribuciones del Poder Legislativo, —otorgadas por la Constitución Federal—, a la cual se le denomina clausula habilitante. Sirve a lo anterior, la tesis emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido siguiente:

**REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS. SUS LIMITES.** Mediante el ejercicio de la facultad reglamentaria, el titular del Ejecutivo Federal puede, para mejor proveer en la esfera administrativa el cumplimiento de las leyes, dictar ordenamientos que faciliten a los destinatarios la observancia de las mismas, a través de disposiciones generales, imperativas y abstractas que detallen sus hipótesis y supuestos normativos de aplicación. Sin embargo, tal facultad (que no sólo se deduce de la fracción I del artículo 89 constitucional, sino que a la vez se confirma expresamente el contenido de la fracción VIII, inciso a), del artículo 107 de la propia Carta Suprema), por útil y necesaria que sea, debe realizarse única y exclusivamente dentro de la esfera de atribuciones propia del Poder Ejecutivo, esto es, **la norma reglamentaria actúa por facultades explícitas o implícitas que se precisan en la ley**, siendo únicamente esa zona donde pueden y deben expedirse reglamentos que provean a la exacta observancia de aquélla y que, por ello, compartan además su obligatoriedad. De ahí que, siendo competencia exclusiva de la ley la determinación del qué, quién, dónde y cuándo de una situación jurídica general, hipotética y abstracta, al reglamento de ejecución competará, por consecuencia, el cómo de esos mismos supuestos, por tal virtud, si el reglamento sólo encuentra operatividad en el renglón del cómo, sus disposiciones sólo podrán referirse a las otras preguntas (qué, quién, dónde y cuándo), siempre que éstas ya estén contestadas por la ley, es decir, el reglamento desenvuelve su obligatoriedad a partir de un principio definido por la ley y, por

tanto, no puede ir más allá de ella, ni extenderla a supuestos distintos, ni mucho menos, contradecirla; luego entonces, la facultad reglamentaria no puede ser utilizada como instrumento para llenar lagunas de la ley, ni para reformarla o, tampoco, para remediar el olvido o la omisión. Por tal motivo, si el reglamento debe contraerse a indicar los medios para cumplir la ley, no está entonces permitido que a través de dicha facultad, una disposición de tal naturaleza otorgue mayores alcances o imponga diversas limitantes que la propia norma que busca reglamentar, por ejemplo, creando y obligando a los particulares a agotar un recurso administrativo, cuando la ley que reglamenta nada previene a ese respecto.

**\*Lo resaltado es propio.**

Por otro lado, las disposiciones aplicables a la materia que nos ocupa señalan:

#### ***Disposiciones de la LIPEG***

a) La vigente Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato regula lo relativo al cauce que debe dársele a los recursos y bienes remanentes de los partidos políticos estatales que pierdan su registro legal, remitiendo a lo establecido en el artículo 97 de la Ley General de Partidos Políticos. Así, en el artículo 76 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Guanajuato, se dispone lo siguiente:

***Artículo 76.*** De conformidad a lo dispuesto por el último párrafo de la Base II del Artículo 41 de la Constitución Federal, el Instituto Nacional dispondrá lo necesario para que sean adjudicados a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, los recursos y bienes remanentes de los partidos políticos estatales que pierdan su registro legal, según se trate, para tal efecto se estará a lo establecido en el artículo 97 de la Ley General de Partidos Políticos.

#### ***Disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos***

b) En ese orden de ideas, el artículo 97 de la Ley General de Partidos Políticos establece reglas en tratándose de recursos y bienes remanentes de los partidos políticos nacionales que pierdan su registro legal, sin embargo, también se dice que se estará a lo que determine el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en reglas de carácter general.

#### ***Disposiciones del Reglamento de Fiscalización***

c) Apartir de la reforma político electoral del 2014, en el artículo 41 base V, apartado B, penúltimo párrafo, se establece que es el Instituto Nacional Electoral el encargado de realizar la fiscalización y vigilancia, de los recursos otorgados a los partidos políticos nacionales y locales, en tal sentido el acuerdo INE/CG263/2014 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que

expide el Reglamento de Fiscalización y se abroga el Reglamento de Fiscalización aprobado el cuatro de julio de dos mil once por el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral mediante el acuerdo CG201/2011; establece en su considerando 51 que será en el propio *Reglamento de Fiscalización*, en donde se regule el procedimiento de liquidación y destino de los bienes que se deberá seguir cuando los partidos políticos pierdan o les sea cancelado su registro inclusive en ámbito local, lo cual se establece de la siguiente forma:

*51. Que a efecto de contar con un ordenamiento claro y sistemático que establezca las características y los requisitos relativos al registro y comprobación de las operaciones de ingresos y egresos; sobre la presentación de los informes del origen y destino de los recursos que obtengan por cualquier modalidad de financiamiento; su empleo y aplicación; los procedimientos para su fiscalización, el procedimiento de liquidación y destino de los bienes que se deberá seguir cuando los partidos políticos pierdan o les sea cancelado su registro ante el Instituto Nacional Electoral u Organismo Público Local correspondiente; así como el procedimiento para la liquidación de las Asociaciones Civiles para el caso de los Candidatos Independientes, se estima necesario expedir el presente Reglamento.*

*\*Lo resaltado es propio.*

De las disposiciones reseñadas, se colige que no se concede la aludida cláusula habilitante a los organismos públicos electorales cuando se trata del procedimiento de liquidación y destino de recursos y bienes remanentes de los partidos políticos estatales que pierdan su registro legal, sino que de manera expresa es el Instituto Nacional Electoral el responsable de disponer lo necesario y por tanto quien tiene la facultad reglamentaria en la materia.

Sin embargo, las anteriores consideraciones no implican que el Instituto no tenga competencia para actuar en el tema, ya que de conformidad con lo establecido en el artículo 380 Bis, numeral 4, del *Reglamento de Fiscalización*, la liquidación de los partidos políticos locales le corresponde a los Organismos Públicos Locales Electorales, procedimiento establecido en el Libro Séptimo del *Reglamento de Fiscalización*.

Lo anterior aunado a que, el citado reglamento define como uno de sus objetos el de establecer las reglas relativas a los procedimientos que realicen las instancias de fiscalización local respecto de la revisión de la liquidación de los institutos políticos, además de que dicho reglamento considera como sujetos obligados a los partidos políticos con registro local.

Por tanto, este Consejo General considera necesaria la abrogación del *Reglamento que establece el procedimiento para la liquidación y destino de los recursos y bienes remanentes de los partidos políticos estatales que pierdan o les sea cancelado su registro ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato*.

Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, 92, fracciones II y XXXIX, 93 Bis II, III, V, y XII y 94 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, y 4, fracciones I, II y XVI y 6 fracciones IV y XIII del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, se somete a consideración del Consejo General el siguiente:

#### **ACUERDO:**

**PRIMERO.** Se abroga el *Reglamento que establece el procedimiento para la liquidación y destino de los recursos y bienes remanentes de los partidos políticos estatales que pierdan o les sea cancelado su registro ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato*, por los motivos expuestos en el considerando 3 del presente acuerdo.

**SEGUNDO.** Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

Notifíquese por estrados.

Con apoyo en lo previsto por los artículos 93, fracción IV, y 98, fracción VII, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, firman este acuerdo el Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y la Secretaria Ejecutiva del mismo.